

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

1º) En estos autos RUC 2210022074-5, RIT 2287-2022, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por sentencia de fecha 24 de febrero del año 2023 se absolvió a FELIPE IGNACIO OLIVA LAZZERINI del cargo formulado en su contra como autor del delito consumado de injurias graves con publicidad, previsto y sancionado en el artículo 417 N° 3 en relación con el artículo 418, ambos normas del Código Penal.

En contra de esta decisión, la parte querellante dedujo recurso de nulidad por la causal prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal (CPP), esto es, en haberse omitido en la sentencia el requisito de la letra c) del artículo 342 del mismo cuerpo legal.

Reiterando los hechos descritos en la querella, señala en primer término que el día 24 de agosto de 2021, a las 10:00 am, durante una reunión convocada por el querellado con un grupo de trabajadores en las oficinas de la empresa ubicada en Avenida Nueva Providencia 2353, oficina 601, comuna de Providencia, el querellado procedió a proferir públicamente dichos maliciosos, infundados y falsos frente a los trabajadores señalando: “Todos los que se fueron, se fueron por malas prácticas”, en clara alusión a los tres querellantes, que habían sido recientemente desvinculados. En una segunda oportunidad -agrega-, en horas de la mañana del día 27 de diciembre de 2021, el querellado concurrió a las oficinas de la Universidad Católica de Chile ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 340, comuna de Santiago, a entrevistarse con don Francisco Velásquez, dueño y representante legal de “Asesoría Innovación, Ciencia y Tecnología Educativa SpA”, quien es cliente de uno de los querellantes, don Patricio Muñoz González, y que al no encontrar al Sr. Velásquez, le señaló a su secretaria, doña Miriam Alarcón, que aquel “realiza facturas falsas” y que “desfalcó mi empresa”.

Plantea que la sentencia infringe el principio de razón suficiente y de la lógica, por cuanto no tuvo en consideración, para dar por acreditados los hechos, la siguiente prueba de cargo de la parte querellante: a) declaración de don Marco Andrés González Saavedra, ex trabajador, quien declaró respecto a los hechos presenciados y, en particular, de haber presenciado la frase esgrimida en la reunión de fecha 24 de agosto de 2021 ante un grupo



de personas de la empresa; b) declaración de don Helmer de Jesús Canales Ortiz, quien recibió una llamada telefónica de doña Nancy Jeanette De Lourdes Navarro Molina, querellante en autos, quien le comentó a este testigo respecto de los supuestos motivos de su despido; y c) declaración de don Jaime Adolfo Velásquez Osorio, quien recibe el testimonio de los querellantes y da cuenta de lo que habría ocurrido al momento de sus despidos.

Indica que existe, por tanto, un testigo que presenció los dichos injuriosos proferidos y existen testigos de oídas que reafirman lo señalado por este testigo directo, por lo que a su juicio existe prueba directa y prueba periférica que corroboran los hechos materia de la querella. Inserta a continuación una imagen parcial del considerando quinto de la sentencia, y reitera que los razonamientos allí expuestos pugnan con el principio lógico de la razón suficiente, pues, a su entender, a través de la correcta valoración de los medios de prueba rendidos el sentenciador “debería haber condenado al querrellado por el delito consumado de injurias graves con publicidad”.

2º) Que como se observa, la nulidad impetrada se sustenta únicamente en la discrepancia que manifiesta el recurrente respecto de la valoración de la prueba por parte del sentenciador, pues, a su juicio, los testimonios mencionados serían suficientes para condenar al querrellado. No explica, sin embargo, la forma concreta en que la sentencia infringiría los principios de la lógica y de la razón suficiente, limitándose en cambio a manifestar, de manera genérica e imprecisa, su disconformidad con el análisis de la prueba que realiza el juez de primer grado, afirmando -como se acaba de señalar- que los precitados testimonios constituirían antecedentes bastantes de incriminación y condena.

3º) Que el artículo 372 del Código Procesal Penal dispone que *“El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley.”*

Por su parte, el artículo 374 agrega: *“(…) El juicio y la sentencia serán siempre anulados: (…) e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e);”*

Luego, el artículo 342 prescribe -en lo que atañe al presente asunto- que *“(…) La sentencia definitiva contendrá (…) c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron*



por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”, disposición esta última que dispone:

“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.”

Finalmente, el artículo 385 del Código de que se trata establece:

“Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dados por probados, sino se debiere a que el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.”

4º) Sin perjuicio de lo expuesto en el motivo 2º anterior, lo que de por sí resulta suficiente para el rechazo del presente arbitrio de nulidad, resulta pertinente aclarar que la sentencia atacada realiza un acabado análisis de las probanzas de la parte querellante, concluyendo razonadamente que ellas resultan insuficientes para formar convicción, más allá de toda duda razonable, sobre la efectiva configuración del delito que se imputa y de la participación culpable que le correspondería en él al querellando.

Es así como, en el considerando quinto, la sentencia destaca que, en relación al hecho que habría ocurrido el 27 de diciembre de 2021, no se rindió prueba alguna en la causa, toda vez que ninguno de los testigos presentados por la parte querellante aportó algún tipo de información



referido a ese hecho. Luego, y en cuanto a los hechos que habrían ocurrido en el mes de agosto de 2021, señala que declararon tres testigos: don Marco Andrés González, quien expuso sobre hechos que habría presenciado en esa época, además de los testigos Helmer de Jesús Canales Ortiz y Jaime Adolfo Velásquez Osorio, quienes informaron sobre hechos de los cuales tomaron conocimiento a través de otras personas.

Agrega la sentencia que, sin embargo, de las pruebas recién mencionadas no se pudo obtener convicción de acuerdo al estándar legal, por cuanto no fueron de la entidad y número suficiente, que permitan efectuar un análisis racional de la misma, en términos de posibilitar un examen diferenciado y comparativo de los medios probatorios, estableciendo relaciones de coherencia y correspondencia que permitiesen llegar a las mismas conclusiones que el ente persecutor.

Explicando este aserto, expone que las declaraciones de un testigo, don Marco Andrés González Saavedra, quien declaró sobre un episodio de desvinculación de la empresa BCN School, no se encuentran corroboradas por ningún otro medio probatorio relevante, en la medida que los testimonios de Helmer de Jesús Canales Ortiz y Jaime Adolfo Velásquez Osorio, se refieren a hechos de los cuales tomaron conocimiento a través de otras personas. A ello se suma que el testigo González Saavedra, si bien afirma haber escuchado la expresión que la querellante estima injuriosa, ello no se encuentra avalado por la versión de los propios ofendidos, quienes no fueron presentados ni prestaron declaración no obstante ser quienes con mayor propiedad podían informar al tribunal sobre la existencia de las expresiones que se mencionan en la querella, y sobre la impresión o impacto que les pudo producir aquella manifestación de expresión. Tal circunstancia, además, repercute en el valor probatorio de los testimonios de Helmer de Jesús Canales Ortiz y Jaime Adolfo Velásquez Osorio, quienes señalan haber conocido los hechos precisamente por los dichos de las víctimas, que como se dijo no declararon en la causa.

Por lo anterior, en suma, la sentencia concluye que *“conforme a la exigua prueba rendida y de escaso valor probatorio, no ha podido darse por acreditado el hecho.”*

5º) Que conforme prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, los tribunales aprecian la prueba con libertad, *“constituyendo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos*



científicamente afianzados sólo acotados límites al ejercicio de dicha libertad, razón por la que el arbitrio que plantee que dichas fronteras fueron sobrepasadas o desatendidas por los jueces de la instancia deberá puntualizar cómo tal vicio o defecto se concretó en la exposición de la valoración de determinados medios probatorios que sirvieron para fundamentar determinados hechos y circunstancias en que se sostuvo la decisión condenatoria (Corte Suprema, sentencia Rol N° 15.028-2020).

Adicionalmente, y a diferencia del recurso de apelación, el recurso de nulidad es un arbitrio procesal estricto y excepcional que, como tal, no permite realizar una nueva ponderación de toda la prueba rendida en el proceso ni, por tanto, revisar el mérito del discernimiento jurisdiccional que en torno a ella realiza el tribunal de primera instancia. Se trata, por el contrario, de un examen material en cuanto a la acertada aplicación del derecho en su vertiente legal y constitucional, incluyendo los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes; o en su caso, de una verificación del ajuste formal de la sentencia a los requisitos establecidos por la ley.

La causal de nulidad planteada, en suma, apunta a garantizar la necesaria motivación de la sentencia y la razonabilidad de su constructo, en el entendido que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, conforme lo dispone el ya citado artículo 297 del Código Procesal Penal. El control de la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica, por tanto, no puede involucrar una nueva valoración de la prueba y de su fuerza de convicción -pues ello supondría afectar la naturaleza misma del presente arbitrio recursivo y, desde allí, la competencia de este tribunal por la causal invocada-, debiendo limitarse el examen jurisdiccional a la revisión externa de la sentencia impugnada en cuanto a su necesaria racionalidad, coherencia y razonabilidad.

De este modo y considerando que el sistema procesal chileno reserva al tribunal de la instancia la apreciación de la prueba, para que prospere la causal invocada debe constatarse la ausencia de una exposición clara, lógica y completa de los hechos, en términos que impidan entender cuáles fueron los que el tribunal tuvo por acreditados para construir un relato que conduzca, de manera racional y lógica, a la calificación jurídica de los



antecedentes fácticos y las circunstancias que sustentan la decisión. En tal sentido, la libre apreciación de la prueba reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

6º) Que por lo expuesto, y considerando que el reproche que efectúa la recurrente radica, a fin de cuentas, en su discordancia con el sentenciador en cuanto a la valoración de la prueba y a su fuerza de convicción, la causal de nulidad que se analiza no puede prosperar pues tal discrepancia, como ya se dijo, no involucra en modo alguno una infracción al principio de la lógica ni, por tanto, una vulneración de las normas legales que sustentan el recurso.

7º) Que en síntesis, bajo la excusa de atacar las reglas de la lógica formal, el recurso realiza una crítica al panorama probatorio de la causa en lo concerniente a la efectiva existencia de los hechos por los que se acusa, planteando desde allí la tesis de la falta de fundamento que, como se indicó, no es correcta desde que el fallo que se revisa sí se encuentra suficientemente fundado.

Por todo lo anterior, la conclusión de esta Corte es que no se configura el vicio de anulación invocado por la recurrente, lo que determina que el recurso en examen no pueda prosperar y deba ser desestimado por esta causal.

Por estas consideraciones y deconformidad, además, con lo que disponen los artículos 273, 372, 373, 374, 380 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de febrero del año 2023, dictada en los autos RUC 2210022074-5, RIT 2287-2022, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la que no es nula.

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese al tribunal de origen, por la vía más rápida.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma la Ministra (s) señora Erika Villegas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso administrativo.

Penal N°1167-2023.





RXZGXFKPXC

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

